


## INTERVENCIÓN MINISTERIO PÚBLICO

Lina Patricia Gomez Gomez <lpgomez@procuraduria.gov.co>

Jue 11/01/2024 16:21

Para: Juzgado 01 Laboral Circuito - Huila - Neiva <lcto01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (249 KB)

Intervención Procuraduría judicial proceso -2023-398- ineficacia traslado...pdf;

Cordial saludo, señores Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva. A continuación, adjunto intervención en el proceso, radicado 41001310500120230039800. Así mismo, ruego comunicar a esta agencia del Ministerio Público las audiencias que se llevarán a cabo en el asunto.

Atentamente,



**Lina Patricia Gómez Gómez**

Procuradora Judicial I

Procuraduría 211 Judicial I Para Asuntos Del Trabajo Y Seguridad Social

[lpgomez@procuraduria.gov.co](mailto:lpgomez@procuraduria.gov.co)

PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 11927

Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808

Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá, Cód. postal 110321



## PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Bogotá, 11 de enero de 2024  
Oficio PJI- 2  
E -2023- 762045

Doctor  
Armando Cárdenas Morera  
Juez Primero Laboral del Circuito de Neiva, Huila  
[lcto01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:lcto01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Referencia: proceso ordinario  
Radicado: 41001310500120230039800  
Demandante: Martha Helena Guzmán Mesa  
Demandado: Colpensiones, Colfondos y Porvenir

Asunto: Intervención del Ministerio Público

**Lina Patricia Gómez Gómez**, de conformidad con las facultades otorgadas en el numeral 7º del artículo 277 de la Constitución Política, el artículo 48 del Decreto 262 de 2000 y artículos 16 y 74 del CPTSS, actuando en calidad de Agente del Ministerio Público, respetuosamente me permito intervenir en el presente asunto solicitando se tenga en cuenta las siguientes manifestaciones en defensa del orden jurídico, los derechos y garantías fundamentales.

### Síntesis de la demanda

La señora Martha Helena Guzmán Mesa, por medio de mandatario judicial pretende, principalmente que se declare la *ineficacia* del traslado al Régimen de Ahorro Individual a través de las AFP Porvenir S.A. (1997), y Colfondos, convocadas a juicio, en razón a no haber recibido información idónea. Así mismo pretende su consecuente regreso al RPMPD, y se ordene “trasladar a Colpensiones, la totalidad de los valores de la cuenta de ahorro individual de la actora como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales aseguradas, con todos sus frutos e intereses, rendimientos financieros (...) sin descontar la cuota de administración (...) sumas debidamente indexadas (...)”. Subsidiariamente, se pide declarar que la accionante sufrió “perjuicios patrimoniales y morales debido al cambio de régimen”, de las cuales son responsables las AFPs Privadas por la omisión en el deber de información.

En la demanda se menciona que la accionante se encuentra actualmente pensionada con una pensión del mínimo<sup>1</sup>, situación que considera le generó un daño, pues percibe una pensión inferior a la que tendría derecho si se hubiere pensionado en el RPM, “lo cual repercutió en su calidad de vida y en el de su familia”.

### Intervención del Ministerio Público

Es pertinente precisar que el Ministerio Público realiza su pronunciamiento con base en los documentos que fueron allegados, en virtud de la Ley 2213 de 2022 que dispuso medidas para tramitar los procesos en las diferentes jurisdicciones, incluida la ordinaria en su especialidad laboral, a través de las diferentes herramientas tecnológicas. De otra parte, debemos señalar que, en atención a nuestra naturaleza de sujetos especiales y no de partes en el proceso, no nos pronunciaremos, puntualmente, sobre los hechos de la demanda<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ver, numeral “décimo segundo” de la demanda.

<sup>2</sup> De conformidad con el Núm. 7º del Art. 277 de la Constitución Política, corresponde al Procurador General de la Nación por sí o por medio de sus delegados “Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos o garantías fundamentales”, por su parte el Art. 16 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social señala que “[e]l Ministerio Público podrá intervenir en los procesos laborales de conformidad con lo señalado en la ley”. Con relación a los Procuradores Judiciales, quienes además de tener la condición de agentes del Ministerio Público, el Art. 48 del Decreto-Ley 262 de 2000 dispone que actuarán ante las salas laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los Juzgados Laborales, los Tribunales de Arbitramento a que se refiere el Código Sustantivo del Trabajo y demás autoridades que señale la ley, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, las garantías y derechos fundamentales, individuales o colectivos de los trabajadores y pensionados o de las minorías étnicas. Igualmente, intervendrán en los procesos laborales en que sean parte incapaces, cuando éstos no tengan quien los represente. Igualmente, la jurisprudencia también se ha encargado de fijar el sentido y alcance de la intervención de la Procuraduría en su condición de Ministerio Público en la jurisdicción ordinaria. sobre el punto la Sala de Casación Laboral de

**i) Indemnización de perjuicios en el marco de las declaratorias de ineficacia de traslado**

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la ineficacia del traslado se configura como la consecuencia inherente al incumplimiento de las obligaciones que tienen a su cargo los fondos de pensiones, en aquellos escenarios en que los afiliados deciden materializar el acto jurídico de cambio de régimen dentro del Sistema General de Pensiones. Es decir, que las administradoras deben suministrar a las personas toda la información, asesoría y buen consejo que requieran al momento del cambio, so pena de que en un proceso ordinario se declare que el acto de traslado entre regímenes no produce efectos<sup>3</sup>.

No obstante lo anterior, dicha corporación también ha sostenido que las personas que ya tienen la condición de pensionados en el Régimen de Ahorro Individual “no pueden pretender que se declare la ineficacia del traslado con el fin de retornar a Colpensiones, comoquiera que ya hay una situación jurídica consolidada que resulta inconveniente revertir dada la participación de múltiples personas y entidades en el acto de reconocimiento prestacional”<sup>4</sup>.

En la Sentencia CSJ SL3707-2021, el máximo órgano de la Jurisdicción Ordinaria indicó:

“(…) no andaba desencaminado el sentenciador cuando adujo las consecuencias financieras al sistema que podría acarrearle con la declaratoria de ineficacia del traslado, no porque eventualmente fuere masiva, sino porque, para el caso concreto, ya había efectos económicos que no resultaban reversibles y obrar de manera distinta implicaría afectar a terceros de buena fe, en este evento en particular, por ejemplo, a la aseguradora con quien se celebró el contrato de renta vitalicia.

Y es que el efecto de la declaratoria de ineficacia, a falta de disposición específica que regule el tema, según lo ha sostenido la Corte, por regla general, no es otro que el señalado en el artículo 1746 del Código Civil, es decir, dar a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato (CSJ SL2877-2020), lo cual, por las razones arriba explicadas, en estos casos, cuando el reclamante tiene la calidad de pensionado y ha percibido las mesadas contratadas, v. gr. en este evento específico hace ya aproximadamente doce (12) años, esto no es posible.

Cabe recordar que el artículo 79 de la Ley 100 de 1993 autoriza varias modalidades de pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, entre las cuales se encuentra la de renta vitalicia inmediata (art. 80, Ley 100 de 1993), que consiste en que el afiliado o beneficiario contrata directa e irrevocablemente con una aseguradora de su elección, el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el pago de la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho.

Es de destacar que en esta modalidad pensional el monto de la pensión será equivalente al cálculo actuarial del capital individual ahorrado y de las condiciones financieras relativas al pago de intereses que la aseguradora logre obtener por ese capital, labor profesional por la cual ésta recibe una remuneración denominada prima, de donde entre los elementos normativos de este tipo específico de estipulación, la irrevocabilidad no significa cosa distinta a que una vez perfeccionado el contrato de seguro, el afiliado no puede optar por ninguna otra de las modalidades de pensión. Por eso explicó al respecto la Corte Constitucional en la sentencia CC C-841-2003:

Este tipo de plan pensional es, por expresa definición legal, un contrato irrevocable entre el afiliado y una aseguradora, mediante el cual el afiliado adquiere un seguro que le otorga al beneficiario y sus descendientes el derecho a recibir una renta vitalicia mensual. Por su naturaleza, como contrato de seguro que es, los riesgos financieros y de contingencias propias de este tipo de contrato se trasladan a la compañía aseguradora, quien a partir de la celebración del mismo debe hacer las reservas necesarias, adquirir reaseguros y adoptar otras medidas para garantizar la rentabilidad y estabilidad del contrato. Por ello, resulta efectivamente conducente para garantizar la sostenibilidad del sistema y servicios administrativos y financieros adecuados, restringir la posibilidad de traslado en esta modalidad de pensión. De no establecerse esta restricción, ninguna

---

Corte Suprema de Justicia en sentencia con Rad. 32641, del 7 de octubre de 2008 M.P. Dr. Camilo Tarquino Gallego, se pronunció en los siguientes términos: “Para la Sala, es claro que el Ministerio Público por intermedio de sus procuradores judiciales en lo laboral, están plenamente facultados para “intervenir” en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción del trabajo, como expresamente lo indica el artículo 16 del C. P. L.; por lo que podrán, sin restricción de ninguna naturaleza, ejercer sus actividades para la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial, por así autorizarlo la Constitución Política, (art. 118) y para la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, (Numeral 7 del art. 277 de la C.P., art. 56 del Decreto 2651 de 1991, art. 10 de la Ley 25 de 1894, art. 48 del Decreto 262 de 2000). // Obviamente, esta intervención del Ministerio Público en los procesos laborales no puede enmarcarse dentro de los esquemas fijados a las partes, por cuanto la Constitución Política la garantiza (artículo 277 numeral 7), “cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”. Lo que quiere decir que, frente a alguno de estos bienes jurídicos, protegidos por el Constituyente, en el evento que el procurador o sus delegados considere necesaria su intervención, lo podrá hacer, ya sea formulando alegatos, interponiendo acciones o incidentes, proponiendo excepciones, solicitando pruebas y participando en su práctica, o rindiendo conceptos e informes que requiera su defensa, pues como lo indica el precitado artículo 277 (ibídem), en su inciso final, “Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.” Actuación que deberá entenderse y acomodarse a los parámetros y principios que gobiernan el proceso laboral”.

<sup>3</sup> Sentencia SL3856 de 2022, reiterando la Sentencia SL17595-2017.

<sup>4</sup> Sentencia SL3856 de 2022, reiterando la Sentencia CSJ SL373 de 2021.

aseguradora aceptaría asumir los costos de una renta vitalicia, si la continuidad de la relación con el beneficiario quedara sometida a su mera voluntad”.

Sin embargo, ha dicho la Corte Suprema de Justicia que aún cuando la persona ya tenga calidad de pensionado del RAIS ello “no altera la posibilidad de obtener una reparación producto del incumplimiento de las administradoras de brindar información para el momento en que, siendo afiliados, se trasladaron”. Y, por lo tanto, “pueden solicitar el reconocimiento de una indemnización total de perjuicios conforme los artículos 2341 del Código Civil y 14 de la Ley 446 de 1998”<sup>5</sup>. Esto, ante el perjuicio que el traslado entre en regímenes le ocasionó a la persona, materializado en la disminución de su mesada.

De ese modo señaló la Corte que tal indemnización se tasa “calculando la diferencia entre el monto de la pensión que se reconoció al interesado en el Régimen de Ahorro Individual y la que presuntamente se le hubiera otorgado en Colpensiones. En tal caso, impone una condena periódica a favor del pensionado o de sus potenciales beneficiarios, debiendo también compensar o restituir las mesadas previamente ocasionadas (CSJ SL3535-2021) (...)”<sup>6</sup>.

ii) Del caso particular

En la demanda se solicita principalmente la declaratoria de ineficacia del traslado de la parte demandante, del régimen de prima media al régimen de ahorro individual administrado por Porvenir (1997) y Colfondos, con base en que la administradora de fondos de pensiones privada no le dio a la parte actora la suficiente y necesaria información sobre las características de los regímenes pensionales y las consecuencias de su traslado. Así mismo, y de manera subsidiaria, se solicita declarar que la accionante sufrió “perjuicios patrimoniales y morales debido al cambio de régimen”, de las cuales son responsables las AFPs Privadas por la omisión en el deber de información.

Ahora, en la demanda se destaca que la accionante es beneficiaria de una pensión de vejez; calidad que, en efecto se corrobora con la información que reposa en la página del Registro Único de Afiliados “RUAF”, donde se registra lo siguiente:

PENSIONADOS				Fecha de Corte: 2023-12-29		
Entidad Pagadora de pensión	Entidad que reconoce la pensión	Tipo de Pensión	Estado	Tipo de Pensionado	Fecha Resolución	Número Resolución Pension PG
FONDO DE RETIRO PROGRAMADO COLFONDOS S.A.	FONDO DE RETIRO PROGRAMADO COLFONDOS S.A.	Vejez	Activo	Régimen de ahorro individual. No aplica tope máximo de pensión	2020-11-25	73809

En esa medida, y de cara a la jurisprudencia en cita, le corresponde entonces al despacho, verificar -frente al pago de perjuicios por el traslado del RPMPD al de Ahorro Individual-, si de los elementos probatorios allegados al proceso se acredita el daño que se alega, dado que en la demanda lo que se destaca es que aquel se produjo debido a la disminución de la mesada pensional, producto de la omisión del deber de información y asesoría a cargo de las AFPs privadas; sin embargo, no se encuentra acreditado que, en efecto, la mesada en el RPMPD sería superior a la que recibe la actora de Colfondos, pues aun cuando en la demanda se hace referencia a unas cifras, no se realiza un ejercicio de comparación entre uno y otro régimen a través de los cuales se pueda acreditar de manera cierta el perjuicio alegado.

Así las cosas, esta representante de la sociedad solicita que, verificado lo anterior, se conceda lo pretendido en la demanda de conformidad con el resultado obtenido en instancia judicial, de lo contrario, se niegue la misma.

iii) De la Legitimación de la PGN.

Finalmente, en cuanto a la oportunidad de intervenir por parte del Ministerio Público, es pertinente destacar que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en Sentencia 32641 de octubre 7 de 2008, MP. Camilo Tarquino Gallego señaló que podrá intervenir sin restricción alguna y sin estar sujeto a los esquemas fijados para las partes. En ese mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional, en Sentencia T-392 de 2010.

iv) Notificaciones

<sup>5</sup> Sentencia SL5836 de 2022  
<sup>6</sup> Ib.

En cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 78.5 del CGP en concordancia con el artículo 3º de la Ley 2213 de 2022, me permito informar que, para todos los efectos procesales, y en especial para el envío de la citación a audiencias, mi dirección de correo electrónico es [lpgomez@procuraduria.gov.co](mailto:lpgomez@procuraduria.gov.co)

Agradezco la colaboración y trámite, en la oportunidad procesal pertinente, de la anterior solicitud.

En los anteriores términos se deja rendido el concepto, el cual solicito sea objeto de referencia expresa en la sentencia.

Atentamente,



**Lina Patricia Gómez Gómez**  
Procurador 211 Judicial I para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social